

Nueva Sociedad Nro. 153 Enero-Febrero 1998, pp. 104-119

La «Masacre de Navidad». Un fragmento de la violencia estatal y resistencia popular en Bolivia

Lorgio Orellana Aillón

Lorgio Orellana Aillón: sociólogo boliviano por la Universidad Mayor de San Simón, Cochabamba, docente en la Universidad Católica Boliviana, Cochabamba.

Palabras clave: economía indígena, violencia estatal, neoliberalismo. Bolivia.

Resumen:

¿Cuáles el límite de la convivencia multiculturalista en democracia, a partir del proceso capitalista neoliberal de modernización? En esta dirección, se analizan los antecedentes sociales que condujeron a un grupo de mineros, campesinos e indígenas, en la región boliviana de Norte Potosí, a tomar las minas auríferas de Amayapampa y Capasirca, propiedades de una transnacional norteamericana. Se reproducen los hechos y argumentos de la intervención mortal del Estado, posteriores a la toma, que ocasionaron la denominada Masacre de Navidad; concluyendo que el totalitarismo obstructor del respeto a la multiculturalidad en democracia, se encuentra en la dinámica expansiva del neoliberalismo y en la reproducción e imposición de las relaciones capitalistas de producción.

–Cuando yo uso una Palabra, –dijo Humpty Dumpty en un tono más bien desdeñoso– esa palabra significa exactamente lo que yo quiero que signifique, ni más ni menos.

–La cuestión está –dijo Alicia– en si usted puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes.

–La cuestión está –dijo Humpty Dumpty– en quién es el que manda. Eso es todo.

Lewis Carroll, Alicia en el país de las maravillas

En diciembre de 1996, fuerzas combinadas del Ejército y la Policía bolivianos reprimieron a trabajadores de las minas auríferas de Amayapampa y Capasirca¹, indígenas laymes. Juk'umanis y campesinos chayantaqas²;

¹ Centros mineros que se encuentran al Norte del Departamento de Potosí. Amayapampa está en la provincia Chayanta y Capasirca en Rafael Bustillos.

² El grupo étnico juk'umanis, vive «en la región actual del Norte de Potosí. Son mitimaes de origen colla, de habla aymara que durante la colonia adoptaron el quechua, sin olvidar sin embargo su propio idioma a nivel doméstico y laboral.» (Federico Aguiló: Etnias andinas de

quienes conjuntamente habían tomado ambos yacimientos, para entonces pertenecientes a una trasnacional norteamericana. Se comprobaron 10 muertos y 40 heridos³. El hecho sería recordado como la Masacre de Navidad.

En Bolivia, el discurso democrático solía rememorar las masacres militares como a rescoldos del pasado dictatorial, escombros totalitarios barridos por el mecanismo del diálogo y la concertación, el respeto a la diversidad y la pluriculturalidad. Al menos estos eran los principios que, desde su ascenso al gobierno en 1993, la coalición tripartidaria dirigida por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), había dicho propugnar. Durante su gestión gubernamental, un indio aymara ocupó la segunda magistratura del país hasta agosto de 1997, fecha que asumió la presidencia el ex-dictador Hugo Banzer Suárez.

Hoy, un prudente silencio se guarda sobre el significado de diciembre de 1996. Probablemente desempolvar la Masacre de Navidad, permitiría apartar las ilusiones democráticas de quienes en Bolivia todavía sostienen que la economía de libre mercado, la democracia representativa y el multiculturalismo «son los tres ejes del actual consenso político boliviano»⁴; posiblemente recordar a los caídos de Amayapampa y Capasirca, facilitaría a la crítica traspasar el límite detrás del cual se encuentran los distintos partidos políticos de turno, para rastrear al totalitarismo desde la «matriz» económica hasta el régimen político que la reproduce.

¿Son compatibles economía de mercado, democracia y multiculturalismo?, es la incertidumbre que ha dejado diciembre, después de tantas seguridades al respecto. El presente ensayo es un intento por alejar tales certezas, identificando los límites de la democracia y el multiculturalismo, en el proceso capitalista neoliberal de «modernización». Para tal objeto reproducimos los antecedentes históricos, económicos y culturales que condujeron a los mineros, indígenas y campesinos en Norte Potosí a tomar las minas auríferas. En este contexto, sostenemos que la intervención mortal del Estado permite definir la cualidad clasista de un régimen que, ante todo, inclusive a costa de los pueblos indígenas y la democracia, prioriza el resguardo de la propiedad privada de los medios de producción y el proceso neoliberal de modernización.

Bolivia, Fondo Rotatorio Editoriai, Cochabamba, 1992, p 63). Los laymes son quechuas de idioma y cultura. Fueron traídos desde el Norte del Perú por Manco Khalbaj y situados «en la zona de «orqo suyu», colindante con los juk'umanis, Entre ellos surgió una rivalidad que se convirtió en tradicional a través de los t'inkus anuales, en los que la contienda, aún hoy día, da como resultado hechos de sangre» (ibid., p, 73). Más que un grupo étnico específico, los chayantaqas parecen ser «los pobladores de la actual región comprendida por las provincias de Ibañez y Bustillos» (ibid., p. 44).

³ Comisión de Derechos Humanos: *Hechos luctuosos del Norte potosino: Amayapampa, Llallagua y Capasirca*, diciembre 1996, Honorable Cámara de Diputados, La Paz, 1997, pp. 12-13).

⁴ Salvador Romero Pitari: «Los tres ejes del actual consenso político boliviano» en *Balance de las reformas del ciclo democrático. Opiniones y Análisis*, Fundemos, La Paz, 1995, p. 153.

Para reconstruir los hechos hemos acudido a las notas publicadas en la prensa nacional; fuentes que sin embargo tienen un problema durante la represión, las fuerzas militares y policiales impidieron el ingreso de los medios de comunicación a la zona conflictiva. Mucho de lo que se ha escrito fue difundido por vía telefónica y en comunicados enviados por radio Pío XII de Siglo XX; la cual después sería intervenida y cerrada antes que concluyera el conflicto. Se argumentó que estaba llamando a la subversión. Hemos intentado completar el rompecabezas, consultando el informe preliminar de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y un documento difundido por el Centro de Promoción Minera; ambos, escritos en enero de 1997. Esto en cuanto a la masacre, pues las notas periodísticas aparecidas meses antes, que nos dan cuenta sobre la evolución del conflicto, fueron menos vulnerables a la censura. Las referencias a grupos étnicos del lugar, provienen de trabajos antropológicos que serán citados en el desarrollo del ensayo. Por lo demás, quien escribe estas líneas se responsabiliza de cuanto aquí se menciona.

Potosí: breve preámbulo histórico y estadístico

Dicen que los caballos tenían herraduras de plata durante el auge de Potosí y su rico cerro. De plata eran los altares en las iglesias. las alas de los querubines en las procesiones y hasta las calles eran cubiertas con barras de plata durante las fiestas religiosas. En 1573, sólo 28 años después que la ciudad fuera fundada, tenía «la misma población de Londres y más habitantes que Sevilla, Madrid, Roma o París»⁵.

Hoy resultaría poco menos que un insulto a la memoria histórica intentar jactarse de aquella ciudad que entre los siglos XVI y XVII, fue una de las más grandes y ricas del mundo. Desde entonces Potosí se ha ido vaciando, no sólo de sus minerales, también de su gente. Según el Censo de 1992, el departamento tenía 645.889 habitantes, de los cuales apenas el 33,6% vivía en la zona urbana⁶; una proporción insignificante comparada con la población de París, Londres o Nueva York. De la ostentación que proporcionó la explotación minera, casi ni el recuerdo queda. El mapa de la pobreza en Bolivia indica que el 80% de sus hogares vive en condiciones paupérrimas⁷.

Pese a tener la apariencia de un cascarón vacío, en Potosí todavía hay mineral. Datos extraoficiales de 1996 identifican a «35 empresas mineras y medio

⁵ Eduardo Galeano: *Las venas abiertas de América Latina*, Siglo XXI, Madrid, 67a. edición, 1994, p.30.

⁶ Udapso / INE / UPP / Udape: *Mapa de la pobreza, una guía para la acción*, Ministerio de Desarrollo Humano, La Paz, 1993, p. 53.

⁷ El «87,4% de las viviendas no cuentan con las mínimas condiciones en la provisión de agua, servicios sanitarios y/o eliminación de excretas, 77,8% de los hogares tienen algún rezago educativo en asistencia escolar, nivel de instrucción y/o alfabetismo, 67,8% no están provistos de energía eléctrica y/o un adecuado combustible para preparar los alimentos, 67,3% de las familias viven en condiciones de hacinamiento; 66,4% de las viviendas están construidas con materiales de mala calidad; y, 57.9% de los hogares no atiende su salud de manera adecuada» (ibíd.).

centenar de comercializadoras de minerales que consiguen beneficios de esta región»⁸. Sin embargo, la miseria del departamento evidencia que las ganancias de esta explotación no se quedan en Potosí. El Comité Cívico Potosinista denunció la existencia de inversionistas que logran grandes utilidades económicas con la explotación minera, sin dejar ningún beneficio para la región. Sólo en oro se estima que la producción mensual está entre 65 y 70 kilos, lo cual genera una utilidad neta cercana a los dos millones de dólares, evadiendo el pago impositivo. No sólo es con el oro, la evasión se extiende a todos los minerales. El Comité Cívico relata que en 1996 se impuso un pago anual a todas las empresas mineras por 16 millones de bolivianos en concepto de impuestos. Cuando terminaba el año, apenas se habían pagado 4 millones⁹.

Si algo se queda, son los desechos del mineral que contaminan las riberas. Toneladas de basura mineralógica confluyen en los ríos Huayna Mayu y La Ribera, que nacen en el cerro rico y atraviesan la ciudad. En épocas lluviosas estas aguas contaminadas desbordan sus cauces e ingresan en las casas cercanas y en periodos normales, los niños juegan alrededor, ignorando el peligro de contaminarse. Aquí la «gente nace, crece y muere con la contaminación minera»¹⁰.

En agosto de 1996 se rompió un dique que almacenaba desechos minerales en la localidad potosina de Porco, contaminando 20 cuencas hidrográficas en Potosí, Tarija y Chuquisaca; un verdadero desastre ecológico. Flora y fauna del lugar se arruinaron, perjudicando la producción campesina al dañar parcelas de maíz, hortalizas y frutas¹¹.

El margen del desarrollo en Potosí es cada vez más estrecho, mientras que la regresión tiende a ser absoluta. La «modernización» se ha reducido a optimizar la producción, ignorando su contorno. Como en muchos lugares del mundo, aquí el capital ha dejado de ser «una iluminación general en la que se bañan todos los colores», pues el progreso, ya no es la tendencia predominante que asigna a todas las otras formas de producción su correspondiente rango e influencia. En este rincón del mundo, el capital se ha convertido en una «oscuridad general» que determina la «opacidad» específica de todas las formas de existencia que allí toman relieve¹². El «regreso», desigual, combinado y permanente es el que define la cualidad de su movimiento, un contradictorio reflujos con momentos que se hallan a diferentes grados de profundidad. Puede decirse que en dicho proceso, la zona rural de Potosí, en especial el Norte –lugar de la masacre–, es una de las zonas más rezagadas y hundidas de Bolivia.

⁸ *El Diario*, 29/8/96.

⁹ *Presencia*, 25/11/96.

¹⁰ *Presencia*, 3/11/96.

¹¹ *El Diario*, 3/10/96.

¹² Karl Marx: *Elementos fundamentales para la crítica de la economía Política (Grundrisse) 1857-1858*, 1, Siglo XXI, Madrid, 14a. edición, 1986, p 28.

Amayapampa y Capasirca: el lugar de la masacre

La pobreza se extiende al 94% de las viviendas en el área rural de Potosí. Su situación es realmente crítica, 60% de los hogares vive en la indigencia y 12,4% en una absoluta marginalidad¹³. Charcas, Chayanta, Alonzo de Ibáñez y General Bilbao son las secciones más pobres del departamento.

Amayapampa, está en Chayanta. Es un pueblito desierto y Pobrísimo con 4 calles y no más de 30 casas. A 10 kilómetros de distancia y 3.800 metros de altura, en Rafael Bustillos, hay una mina abierta hace ochenta años. El campamento es precario y sus chozas quizá todavía se hallan alineadas con la simetría de prisiones, como describe Sergio Almaraz: «achaparradas, con paredes de piedra y barro cubiertas de viejos periódicos, techos de zinc, piso de tierra»¹⁴; es Capasirca. Cuando no están en el socavón, los mineros retornan a un pueblo cercano que se llama Chuquiuta. Ahí es donde viven.

Durante 1996, 500 obreros laboraban en ambos yacimientos. De ellos, 300 eran eventuales¹⁵. Fue el valle cochabambino el que en los años 70, proveía de trabajadores a estos centros mineros¹⁶. Estudios más recientes han permitido identificar, iniciando los 80, una tendencia al aumento de mineros originarios de los ayllus que se encuentran en Chayanta y Rafael Bustillos¹⁷.

Los laymes, juk'umanis y los mineros: perfil cultural de la resistencia

Cerca de Amayapampa, en Capasirca y Chuquiuta, viven los aguerridos ayllus juk'umanis y laymes. Estos últimos son quechuas en idioma y cultura. Fueron traídos desde el Norte peruano por Manqo-Khapaj, al «orqo-suyu» (Chayanta) como *mitimaes*, «a raíz de la re-estructuración de Manqo-Khapaj como medio eficaz de consolidar sus conquistas del Sur, hasta la frontera con los chiriguanos»¹⁸. En los años 70, constituían un ayllu de aproximadamente 7.000 almas. Dos tercios habitaban la puna, que ellos llaman *Suni*, entre unos 3.800 y

¹³ «[M]ás del 85% de los hogares presenta inadecuación en la satisfacción de sus necesidades básicas. El 97,6% de las viviendas tienen problemas en saneamiento básico: 93,1% no cuentan insumos energéticos adecuados: 87,9% de las familias revelan algún rezago educativo; y 87% de las viviendas están construidas con materiales de mala calidad. En cuanto a la disponibilidad de espacios adecuados en las viviendas y una atención apropiada de la salud de la población, alrededor del 67% de los hogares muestran deficiencias» (Mapa de la pobreza..., cit., p.54).

¹⁴ Sergio Almaraz: *Requiem para una República*, Los Amigos del Libro, La Paz, 4ta. edición, 1985, p. 6.

¹⁵ Cepromin: Historia de la «Masacre de Navidad» en Amayapampa y Capasirca en el Norte de Potosí, Bolivia, Centro de Promoción Minera, 1997, p. 2. [tel.: 3594021]

¹⁶ Olivia Harris: *Economía étnica*, Hisbol, La Paz, 1987, p. 42.

¹⁷ Ministerio de Trabajo Y Desarrollo Laboral / Banco Mundial: «Aspectos de la articulación del pequeño productor campesino del Norte de Potosí con el Complejo Urbano Minero, volumen V» en *Estudio Socioeconómico de los Centros Mineros y su Contorno Espacial*, La Paz, 1982, pp. 146.

¹⁸ Aguiló: ob. cit., p. 74.

5.000 metros de altura. Los demás habitaban los valles templados (de 2.000 a 3.500 metros de altura), a los que llaman *Likina*¹⁹.

Viven del cultivo. Los espacios de pastoreo se poseen comunalmente y la distribución de tierras en el sistema de *manta*²⁰, no es rígida como la propiedad privada. Si bien son familias particulares quienes cultivan la tierra, sus derechos están limitados por la obligación de prestar parcelas a quienes no tienen. Los laymes han resistido el ingreso del dinero y su lógica mercantil en el ayllu. Por siglos han practicado sistemas de reciprocidad laboral como el *chuku*, el *ayny* y la *mink'a*²¹; sistemas que han compensado la fragmentación social, mostrando «un espíritu comunitario superior y de mayor generosidad»²².

Hasta hace dos décadas, la única relación mercantil que establecieron los laymes fue con los mineros. Algunas veces el ayllu les vendía productos agrícolas, cuando no intercambiaban directamente valores de uso (trueque) entre ellos. Entonces, no se conocía otro tipo de vínculos económicos entre el ayllu y la minería, además de algunos comunarios que trabajaban temporalmente en las minas pequeñas de Chayanta.

Actualmente, resulta difícil negar vínculos laborales entre ambos modos de producción: la participación de laymes en la toma de Amayapampa y Capasirca, es justamente indicador de una mayor «convergencia social» entre este ayllu y las minas, producto de un erosiónamiento en la economía étnica, merced a la sequía, escasez de tierras, la contaminación propiciada por el capital y el desarrollo del intercambio mercantil; ocasionando por un lado emigración, y por otro afluencia de fuerza de trabajo itinerante a las minas.

Han sido más bien los juk'umanis, quienes además de cultivarla tierra, han tenido una mayor presencia en los yacimientos de oro. Son collas, y el aymara es su idioma original. Como los laymes, también fueron mitimaes y su cultura agrícola tiene características parecidas. El nombre juk'umani, proviene de la raíz *juku*, que en aymara y quechua significa «búho, que ve de noche. Ladrón. Roba mineral en las minas»²³.

La vida comunitaria en los ayllus y el campamento minero han determinado el establecimiento de estrechos lazos solidarios y un sentido común que resiste la lógica de la propiedad privada de los medios de producción. El minero y su existencia concreta reproducen estas condiciones: tiene un origen fundamentalmente indígena, pero pasa la mayor parte de su vida en interior-mina. En él se funden dos tiempos históricos de diferente origen.

¹⁹ Harris: ob. cit., p. 11.

²⁰ «Existe una larga asociación histórica entre la organización de la tasa y la rotación comunal de los cultivos en grandes terrenos que en esa región se llaman mantas» (ibíd., p. 12).

²¹ Para una aclaración del carácter de estos sistemas de trabajo, ver Harris, pp. 31-36.

²² ibíd., p. 34.

²³ Aguiló: ob. cit., p. 63.

duración e intensidad, dos memorias que el desarrollo desigual del capital ha combinado: la memoria del ayllu y la memoria de la clase obrera.

En el socavón, se recrea simbólicamente la vida agrícola de los ayllus. Como la tierra, la mina es de sexo femenino y los minerales, como los cultivos, también crecen. La mina no se «posee» se «comparte» con ella. Pero al igual que la cultura agraria es reproducida en la actividad minera, ésta introduce una nueva perspectiva en el trabajador. La mina «talla» la personalidad del aguerrido juk'umani o layme, internaliza en él la «disciplina», y un «ritmo» de trabajo diferente; lo transforma en clase con respecto al capital, facilitando el desarrollo de un «instinto» totalizador, el embrión de la conciencia. que permite dar una orientación teleológica al holismo andino.

Ese momento constitutivo posibilita unir la cultura andina a un proyecto histórico global; la probabilidad, pues el proceso, contradictorio y dispar, también entreabre la orientación contraria: el «recuerdo» andino puede definir una actitud conservadora, cercando a la clase obrera en el terreno de sus intereses inmediatos, en su existencia como clase en sí, como fuerza de trabajo. La cultura de los ayllus es sensible a las presiones de la lucha de clases; y, como en Capasirca, es también susceptible a ser «refuncionalizada» por el capital.

Un capitalista que ha trajinado décadas por Norte Potosí, conoce los peligros que implica el contrato de esa fuerza de trabajo. Si la entiende, sabe que no está tratando con obreros de overol y zapatos. Durante ochenta años Capasirca fue de los Yaksic. Para explotar la mina, los esclavos tuvieron que aprender el «lenguaje» de los mineros nortepotosinos, conocer su «lógica» de trabajo. Mientras tuvieron Capasirca, nunca pagaron salarios. Permitían a los trabajadores quedarse con una parte residual de la producción, a cambio de una labor pacífica.

De esta manera, reproducían con habilidad la estructura simbólica de la «reciprocidad andina», existente en el sistema laboral de la *minka* –practicada por juk'umanis y laymes– donde «la retribución típica de trabajo toma la forma de producto que se ha obtenido con la contribución del trabajador»²⁴. A cambio del trabajo «contribuido» a los empresarios, los obreros eran «retribuidos» con mineral. En este sentido, la «reciprocidad andina» fue instrumentalizada por el capital como un tácito y oculto estabilizador de la lucha de clases en Capasirca.

Las mediaciones simbólicas entre empresarios y mineros trascendían el socavón, extendiéndose al territorio. Se permitía que los campesinos e indígenas del lugar pastorearan sus ganados y realizaran cultivos en el territorio de las concesiones mineras. Sin percatarse de ello, los empresarios respetaban el espacio dentro del cual se reproducían ancestrales creencias.

²⁴ Harris: ob. cit., p. 35.

El *aviadores* el dios de los cerros, que aveces lleva mineral en su interior. Protege a la gente, provee de ganado, fertiliza la tierra con lluvias facilitando buenas cosechas. Es masculino porque protege; y como la madre tierra, la pachamama, también es femenino pues «gesta» el mineral, «produce» buenas cosechas y «provee» de ganados²⁵. Alrededor del *aviador*, los juk'umanis, laymes y chayantaqas, configuraban su espacio agrario.

Ochenta años habían facilitado a los dueños de Capasirca reproducir prácticas; y, sin saber, permitir creencias enraizadas en el imaginario de mineros, campesinos e indígenas: logrando cierta continuidad y estabilidad en la extracción minera. Sin embargo, pese a esos vínculos simbólicos, la explotación seguía siendo conflictiva, condicionada a la cultura ancestral de los andinos y al instinto explosivo de los mineros. La contradicción seguía definiendo la cualidad del proceso. Quizás adormecida, la posibilidad de orientares a esa agresividad juk'umani y layme en una acción obrera, existía; y, potencialmente, también la probabilidad de confrontación, masacre; o quizás de la «redención» como diría Walter Benjamin. Todo estaba en las condiciones.

Las premisas de la masacre

Un 15 de marzo, los Yaksic y la familia Garafulic²⁶, propietaria de Amayapampa; vendieron sus yacimientos a Da Capo Resources Ltd., de Canadá. La mina Amayapampa costó ocho millones de dólares y Capasirca dos²⁷. En julio, Da Capo se uniría a Granges de Estados Unidos, formando Vista Gold Corporation (VGC), con un valor mercantil de 150 millones de dólares, cotizados actualmente en las bolsas de América del Norte²⁸.

Los mineros se estrellaron con la política administrativa de los norteamericanos. En ese muro, experimentaron el neoliberalismo. Se quiso

²⁵ Gabriel Martínez también hace referencia a la faceta diabólica y destructora que en algunas regiones de Bolivia tiene el dios de los cerros. Sin embargo, refiriéndose al *aviador*, indica que éste tiene una mayor carga de «creación y conservación» (Gabriel Martínez: «Los dioses de los cerros en los Andes» en *Journal de la société des Américanistes*, Au siega de la société musée de l'homme, París, 1983, p. 102). Cabe señalar que el autor no registra a los *aviadores* de Norte Potosí; sin embargo, es con el mismo nombre que en la región se denomina al dios de los cerros.

²⁶ El representante comercial de la familia, es Raúl Garafulic: propietario de *La Razón*, uno de los más importantes periódicos de circulación nacional; y el principal accionista de ATB, la red televisiva más importante del país. Influyente miembro del entonces partido gobernante MNR, ha sido catalogado por la revista *Nueva Economía* como uno de los 10 empresarios más exitosos de 1996 (*Nueva Economía* N° 1156, 1996, p. 13).

²⁷ La venta se realizó con la intermediación del geólogo australiano Anthony O'Connor, a quien *Nueva Economía* también ubicó entre los 10 empresarios más exitosos de 1996. Pese a la postergación de medio año a su ingreso en la explotación minera, ocasionada por la resistencia, el australiano persistió en su intento hasta la masacre. En diciembre de 1996, la revista festejaba esta actitud indicando: «Ante estos problemas, tal vez otro empresario extranjero ya se hubiera ido del país. Pero el geólogo australiano está decidido a quedarse ... Un ejemplo sin duda de perseverancia empresarial» (*Nueva Economía* N° 1156, 1996, p. 13). La revista le otorgó el título: «O'Connor: un minero de pedernal».

²⁸ *Nueva Economía* N° 1156, 1996. P. 13

romper «el sistema de trabajo de Capasirca ya que no era formal ni adecuado a las disposiciones vigentes y obviamente ya no había posibilidad de compartir la producción»²⁹. El proceso neoliberal de «modernización» en Capasirca, significaba apartar las pervivencias laborales andinas del modo de producir capitalista y eliminar los resabios de la empresa estatizada. Para la doctrina neoliberal, «eficiencia» no significa maximizar beneficios, sino minimizar costos. En mayo, después de haber vendido Capasirca, Boris Yaksic anunció el cambio de razón social de la mina. Luego, vendría la habitual «mecánica de clases»:

[Los trabajadores de Capasirca] se declararon en estado de emergencia, luego de que el propietario [Boris] Yaksic les comunicara el cambio de razón social de la mina. La respuesta fue contundente, pues el cambio de propietario significa para los mineros la liquidación, pérdida de años de trabajo, así como la pérdida de conquistas sociales alcanzadas con grandes esfuerzos, explicó el secretario permanente de la Federación de Trabajadores Mineros de Bolivia ...³⁰

Rechazar el ingreso de los norteamericanos y «estudiar la posibilidad de hacerse cargo de la mina» fueron las resoluciones de una asamblea en Capasirca. Mientras analizaban las implicaciones del cambio de dueño, en un momento superior de lo instintivo, muy próximo a la conciencia, los mineros «entrevieron» en la asamblea, que los medios de producción eran el resultado de su trabajo y no de la «capacidad empresarial, La consigna de «autogestión» surgió inicialmente como un impulso visceral, primario, espontáneo, pero en el umbral de adquirir un horizonte político, pues no es en cualquier circunstancia que los obreros se plantean tomar los medios de producción. En este sentido, tendían a sobrepasar la «mecánica de clases, «Ver la posibilidad de hacerse cargo de la mina», no significa planear cualquier medida de presión; significa que, desde ese alejado espacio geográfico en que se encuentran, los mineros están rondando el asunto del poder. Sin embargo, en Capasirca, la distinción entre horizonte político y conservación de la estructura laboral de la *mink'a*, como objetivo, todavía era difusa. El conflicto estaba en sus inicios y su desarrollo fue además detenido por un compromiso obrero-patronal. El 13 de mayo, la empresa firmó un convenio, homologado por el Ministerio de Trabajo, donde se comprometía a

garantizar los beneficios sociales y la antigüedad de los trabajadores, mejorar la tecnología y las condiciones de trabajo, garantizar la estabilidad laboral sin excepción alguna, cumplir con todos los aportes para la seguridad social y otros beneficios, dotar de pulpería, materiales de trabajo, herramientas e implementos de seguridad industrial ...³¹

El convenio obrero-patronal es esa momentánea unidad de contrarios, esa breve suspensión de las hostilidades que no garantiza el desarrollo «normal» de la producción; en este caso, inclusive es el preludio de la tormenta, pues la empresa ha firmado para amainar los ánimos, no para cumplir. En el transcurso

²⁹ *Presencia*, 22/12/96.

³⁰ *Presencia*, 7/5/96.

³¹ Ministerio de Trabajo, resolución administrativa N° 1 012/96 del 20 de mayo de 1996, cit. por Cepromin, ob. cit., p. 3).

de tres meses se firmaron dos convenios más, donde también se garantizaban realizar las promesas que después tampoco serían cumplidas³².

Hubo un momento límite que definió el curso posterior de los acontecimientos; esa línea divisoria que anuncia el desgaste de la amenaza y el paso a las acciones directas. Este momento preciso, no sólo fue definido por el incumplimiento de convenios obrero-patronales. Perder beneficios sociales y seguridad laboral, para obreros que en su mayoría tenían 15 años de antigüedad, era una condición necesaria, pero no suficiente. No se trataba únicamente de un convenio legal, «moderno», registrado en la «memoria corta» de los mineros, su memoria de clase; sino de la «traición» a pacto tácitos, simbólicos, tradicionales; fue la insurgencia de la «memoria larga», la memoria del ayllu, un intento por conservar la estructura laboral de la *mink'a*.

Entre mayo y agosto de 1996, se dio un proceso acumulativo de tensiones por el intento empresarial de ejercer «moderna» y directamente su autoridad sobre los mineros, sin ningún tipo de «mediación», excluyendo la estructura simbólica de la «reciprocidad andina». Al fracasar, los norteamericanos quisieron cerrar la mina, argumentando la necesidad de modernizar la empresa:

La empresa requiere incorporar tecnología de punta, además de cumplir con las normas ambientales vigentes en el país. Además la contaminación del río ya provocó el reclamo de, pueblo de Chuquiuta ... En consideración a esto, es que se ha anunciado a los trabajadores mineros que la mina de Capasirca está obligada a cerrar para modernizarse completamente.³³

El proceso requirió de policías que, como se denunció a la prensa, resguardaban el campamento y amedrentaban a los mineros³⁴. Una vez que el «pacto tácito» de la *mink'a* fue roto, tres convenios obrero-patronales incumplidos y la mina cerrada; los conflictos internos derivaron en el secuestro de un ingeniero³⁵; y, el 17 de agosto³⁶, los mineros tomaron Capasirca denunciando:

violación de los derechos humanos, evasión de responsabilidades con la seguridad social, falta de educación, trato salarial negativo y mantenimiento de la empresa en condiciones infrahumanas, carencia de asistencia técnica e incumplimiento de acuerdos homologados por el Ministerio de Trabajo.³⁷

Por su parte, la empresa inició acciones legales, obteniendo mandamientos de apremio para aquellos que habían participado del secuestro y la toma, además de amenazar a quienes intentaran participar de algún otro acto «delictivo». La agresión empresarial traspasó el terreno de la actividad minera, vulnerando la noción espacial de los campesinos y originarios, cuando intentaron «poseer»

³² *Ibíd.*, pp. 3-4.

³³ *Presencia*, 17/8/96.

³⁴ *Presencia*, 13/8/96.

³⁵ *Presencia*, 22/12/96.

³⁶ *Presencia*, 15/11/96.

³⁷ *Presencia*, 15/11/96.

las tierras que se hallaban en las concesiones mineras, alejando a los campesinos e indígenas de las proximidades de la mina; del lugar en el que pastoreaban su ganado, tenían sus cultivos y se encontraba «el dios del cerro» el *aviador* de Amayapampa y Capasirca. La empresa los conminó

a abandonar sus cultivos que quedaron dentro de concesiones mineras compradas a los anteriores dueños; invad[ió] los sembradíos, canchones y oblig[ó] a abandonar los terrenos de pastoreo de vacas, ovejas y llamas de los campesinos con abusos y arbitrariedades, con ayuda de 150 efectivos de la Policía Nacional transportada desde la ciudad de La Paz.³⁸

Amparado en una orden judicial, O'Connor pidió en noviembre la intervención no sólo de esos territorios, sino de la mina, ocasionando la reacción de los pobladores de Chuquiuta, los mineros y los juk'umanis, quienes impidieron el ingreso de la policía. Ese fue el momento de síntesis entre la memoria corta y larga de ese fragmento de la nación oprimida: los mineros tomaron la mina al romperse el pacto de la *mink'a* y los pueblos originarios hicieron suya la consigna obrera de «autogestión»; ambos han dejado de ser objetivos separados. Se ha integrado a los ayllus en una acción obrera con claridad política, la «autogestión», una de cuyas consignas transitorias, es la recuperación del sistema laboral de la *mink'a* y del espacio territorial para cultivos y pastoreo.

Con sus pututus al viento y en estado de apronte, los juk'umanis vigilan la mina de Capasirca ante cualquier nueva intervención policial, como ya ocurriera en pasados días, cuando 150 efectivos se enfrentaron a los trabajadores de lamina aurífera, propiedad de la canadiense Da Capo. Al lado de los juk'umanis están los chayartacas y laymes, ayllus aguerridos, quienes han resuelto intervenir las minas auríferas de la provincia Bustillo, evitar la contaminación provocada por los empresarios mineros y en lo posible explotar por cuenta propia estas riquezas de las que jamás se beneficiaron.³⁹

Juk'umanis y laymes son contendientes ancestrales. Anualmente protegen sus cabezas con monteras y envuelven sus manos con cuero de oveja, para enfrentarse a golpes en el tradicional *t'inku* (el encuentro). Desde que fueron traídos a Norte Potosí por Manco Khapaj, se han disputado tierra y lugar. Este conflicto ha sido ritualizado a través del *t'inku*, aunque la agresividad entre ambos ayllus se mantiene. Hay la creencia de que mientras más muertos resulten de ese enfrentamiento multitudinario, mejor será la cosecha durante el año⁴⁰. En diciembre de 1996, esta centenaria agresividad se orientó en dirección de la empresa norteamericana y los policías que intentaron recuperar las minas. También fue por un problema territorial. La intervención de las minas,

³⁸ Cepromin: ob. cit., P. 5.

³⁹ *Presencia*, 19/11/96.

⁴⁰ «Las luchas se desarrollan en un estado de embriaguez total ... Algunos afirman que a veces, cuando las autoridades nacionales no están presentes, la ferocidad del conflicto podría llegar hasta el punto de despedazar a alguna víctima y comerse pedazos de la misma, se dice que esto debería hacerse de suyo a mano limpia y no con cuchillo. El *t'inku* aparece como la oportunidad para la liberación total de energía en contra de la mitad opuesta» (Tristan Platt: *Espejos y Maíz*, CIPCA, La Paz, 1976, p, 18). Reestablece el equilibrio. Hace algunos años, los militares intentaron dispersarlos con gases lacrimógenos, Hoy, ni la persistente intervención de los curas durante las golpizas, ha podido disminuir la agresividad del *t'inku*.

desde la noción espacial de los laymes y juk'umanis, significaba resguardar el cerro y consecuentemente el territorio.

Amayapampa tampoco fue ajena al proceso de «modernización» que en agosto había anunciado David O'Connor. Se detuvieron dos trabajadores, acusados de robo. La empresa también prohibió el *pijchu* de la hoja de coca, que en toda mina se realiza desde hace siglos, antes de entrar al socavón. El 17 de diciembre al amanecer, una multitud de obreros, campesinos e indígenas, se reunió a parlamentar sobre ambas medidas. Con los antecedentes de Amayapampa, la asamblea

en señal de rechazo y protesta por la acción empresarial, resolvió exigir el abandono de la mina, tanto de los 6 o 7 técnicos, cuanto de los 25 policías allí destacados. La resolución fue comunicada al Ing. Vásquez que, luego de una situación confusa de insultos y empujones resolvió junto a otros técnicos y personeros de la empresa, hacer abandono del campamento y las instalaciones que fueron ocupadas de inmediato por los trabajadores.⁴¹

Los símbolos de la represión

En noviembre, la Asociación Nacional de los Mineros Medianos, hoy empresarios del oro, había calificado como «peligrosa señal para los inversionistas» la toma «ilegal» de Capasirca. Las directrices de los sucesos posteriores a la toma de Amayapampa pueden identificarse en estas declaraciones de la burguesía minera: «a quien arriesga su capital en el país, el Estado debe asegurarle una *ininterrumpida y pacífica* posesión de sus concesiones»⁴².

⁴¹ Comisión de Derechos Humanos: ob. cit., p. 4.

⁴² *Presencia*, 24/11/96, énfasis nuestro. Este argumento será una constante en las declaraciones del gobierno durante la masacre «el conflicto de Amayapampa y Capasirca apunta a ahuyentar las inversiones en el Occidente boliviano, en contra de todas las potencialidades según el subsecretario de Minería y Metalurgia» (*Presencia*, 22/12/96). Sin embargo, la venta de las minas a la Da Capo, como muchos otros contratos en Norte Potosí, evadía impuestos. Los mineros descubrieron que en la minuta de transferencia, la venta figuraba con «400 mil dólares por Amayapampa y 100 mil por Capasirca», pese a que ambas costaron ocho y dos millones respectivamente. El objetivo era burlar impuestos fiscales que, por transferencia, la ley fija en 3% (Cepromin: ob. cit., p.: 1). La denuncia fue elevada por los mineros a la Secretaría Nacional de Minería, donde se les dijo: «en minería no existe la figura jurídica de la lesión ... [P]or ser una industria aleatoria (insegura), los precios son bajos sin que se pueda denunciar fraude o exigir revocatoria por lesión» (Cepromin: ob. cit., p.2). Pero en el documento de compraventa, entre las garantías de los vendedores a la trasnacional, los esclavos decían haber «presentado todos sus estados financieros y cumplido todas sus obligaciones impositivas dentro del plazo señalado por las leyes bolivianas» (minuta p. 8 y 11, cit. en Cepromin, p. 2) La complicidad del Estado con la evasión impositiva de los mineros medianos y la trasnacional norteamericana fue descubierta y la faceta prebendal del Estado denunciada: «Creo que se está haciendo un gran negocio y se está robando los impuestos al Estado, dijo el [secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia], al denunciar que el gobierno está amparando a estos inversionistas, que al margen de evadir impuestos, explotan a los trabajadores» (*Presencia*, 20/11/1996). Eran los obreros denunciando a la burguesía, por incumplir con las leyes burguesas, lo cual, no era como creer en ellas. Este hecho, también justificaría internamente la necesidad de la masacre: no castigar a los mineros habría equivalido a admitir que el Estado y sus mediaciones prebendales con la minería mediana, todavía forman parte de un mundo enjuiciable (René Zavaleta Mercado:

EL 19 de diciembre vino la ostentación de poder. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos relató que en Amayapampa se desplegaron: «1.500 hombres entre policías y militares, avanzando sobre los cerros para tomar una población fantasmagóricamente pobre»⁴³. Pero además de Amayapampa se reprimió en Capasirca y 80 kilómetros antes de llegar a la mina, en Llallagua. El Centro de Promoción Minera ha calculado que durante el conflicto se desplazaron 2.000 efectivos militares y 1.000 policiales⁴⁴.

Pese a que en noviembre un Ampliado Nacional de la Central Obrera Boliviana había exigido al Ministerio de Gobierno que las fuerzas policiales fueran retiradas, pues existía el riesgo de producirse un «baño de sangre»⁴⁵, el gobierno introdujo al ejército. La muerte fue anticipada por los funcionarios del Estado. Después de los primeros enfrentamientos en Amayapampa, donde hubo «4 muertos y una decena de heridos entre mineros y campesinos»⁴⁶, el prefecto de Potosí sentenció: «[se garantiza la vida] de los pobladores que están actuando legalmente, pero no de aquellas personas que raptan a personas, como han hecho en Amayapampa raptando a ingenieros, o apaleando a los efectivos de la Policía»⁴⁷.

Pobladores de Llallagua denunciaron que contra «la pedrea [de los mineros y campesinos, los soldados] respondieron con disparos claramente dirigidos al cuerpo y a mansalva»⁴⁸. El sábado 21 en Capasirca, «las autoridades habían decidido descargar morteros y bazucas» sobre 300 personas, se trataba de «Mujeres y hombres muy pobres, muchos niños y ancianos ... »⁴⁹, pues en ese momento la resistencia había huido a los cerros para protegerse de las balas.

El desproporcionado despliegue policíaco-militar no se explica por factores casuales como el «nerviosismo» o «incomunicación» entre los oficiales. La masacre no fue un «error», un «accidente». Los mismos portavoces del gobierno dieron cuenta de su «necesidad»: «seamos realistas, ésta ha sido la

«Las masas en noviembre» en René Zavaleta Mercado (comp.): *Bolivia, hoy*, Siglo XXI, México, 1983.1983: 56. En Bolivia, las leyes son demasiado «modernas» para el país. Algunas veces, pedir que la ley se cumpla puede significar ir contra el orden establecido, La prensa ha confundido la denuncia de los mineros con el origen de la masacre, Se dijo que la causa del conflicto era la evasión del pago de regalías para la región, cuando sólo fue el argumento ante a la opinión pública.

⁴³ *Presencia*, 31/12/96.

⁴⁴ Cuatro unidades del Ejército Nacional: Ilimani de Uncía, Ranger de Challapata, Braun de Oruro, Pérez de Potosí, y tres unidades de elite policial: Grupo Especial de Seguridad, la unidad Polivalente antimotines y fracciones de la Unidad Móvil Para el Area I (Cepromin: ob. cit., p.5).

⁴⁵ *Presencia*, 14/11/96.

⁴⁶ Comisión de Derechos Humanos: ob. cit, p. 4.

⁴⁷ *La Razón*, 20/12/96.

⁴⁸ Comisión de Derechos Humanos: ob. cit., p. 7.

⁴⁹ *Presencia*, 31/12/96.

única forma en que se tiene que lograr una pacificación dentro de la región»⁵⁰, declaró el 20 de diciembre el ministro de Comunicación Social.

Para justificar la masiva intervención armada, el gobierno se sirvió del espectáculo que proporcionó el rapto de autoridades en la embajada japonesa de Lima por el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Llegó a decir que existían elementos de esta agrupación terrorista en la zona conflictiva, cuando no inculpaba a grupos «trotskistas» o «coordinadoras revolucionarias» en la planificación de actos «subversivos». En el discurso estatal, la toma aparecía como la acción planificada de grupúsculos sediciosos. En realidad, no necesitaba un «plan terrorista» para calificar las acciones de la resistencia como «subversivas», la toma de minas es por principio subversiva. Socavar las bases del poder no necesariamente requiere un «plan» ni siquiera es imprescindible saber sus puntos vulnerables. Basta la «intuición», la acción elemental de masas que de manera inconciente pueden hacer tambalear, sin percatarse de lo que ocasionan, los fundamentos y proyectos de un sistema.

La herejía no podía quedar sin castigo ni ejemplo: en particular, la masacre tenía que escarmentar a quienes tomaron las minas y, en general, tener trascendencia simbólica, prevenir a todos aquellos que potencialmente podrían hacerlo: «de la masacre inicial, se pretendía pasar al aniquilamiento total de toda resistencia obrero-campesina, a la represión y prepotencia patronal de los inversionistas»⁵¹, a la lógica empresarial del neoliberalismo que pretende ajustar lo diverso en un patrón común de producción:

El Ministerio de Defensa y el Alto Mando Militar justificaron la intervención de efectivos del ejército en operativos de recaptura de los centros mineros auríferos de Capasirca y Amayapampa, en el Norte de Potosí, señalando que está precautelando la propiedad privada y cumpliendo con la ley.⁵²

Esta fue la contradicción que permitió identificar el «límite» en la vigencia de las «libertades ciudadanas» y el «respeto a la diversidad», en los lugares más apartados de una formación social dependiente, atrasada y de «economía combinada», como la boliviana. En aquellos rincones del país, la sociedad es muy «dispersa» para ser «contenida» en el marco de las «garantías constitucionales» y el Estado demasiado débil como para tener tal pretensión. La resistencia popular al ingreso de empresas trasnacionales y su lógica «optimizadora» atrae la represión como mecanismo fundamental de control social: eliminar la rebelión a través de la violencia física, como un requisito para la expansión del neoliberalismo. Ante el hostigamiento de la prensa en relación a la brutal represión armada, el ministro de Defensa respondió: «el ejército está manteniendo limpia la zona y punto»⁵³.

⁵⁰ *La Razón*, 21/12/96.

⁵¹ Cepromin: ob. cit., p. 6.

⁵² *Los Tiempos*, 20/12/96.

⁵³ *Los Tiempos*, 20/12/96.

«Aplicar todo el rigor de la ley» en ese «territorio de nadie, donde las leyes bolivianas no se cumplen» y «donde no se guarda respeto a las autoridades ni a las disposiciones vigentes»⁵⁴, fue el mandato del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Es que, pese a la centenaria presencia de las empresas mineras, Norte Potosí se resiste a ser de alguien. Aunque la propiedad privada es muy próxima a la vida cotidiana de las clases y naciones oprimidas del lugar, sigue siendo extraña a sus mentalidades. A Norte Potosí apenas llegan los estertores de la ideología dominante. En noviembre, mientras resguardaban la mina de Capasirca, los juk'umanis dijeron que «no creen en las leyes bolivianas»⁵⁵.

Consideraciones finales

No ha perdido vigencia aquel pasaje del Manifiesto Comunista donde sus autores analizan cómo el capital «obliga a todas las naciones a adoptar el modo burgués de producción, a *civilizarse*»⁵⁶. En lugar de una explotación encubierta, el capitalismo establece una explotación descarnada y abierta; sustituye el fervor religioso por el frío interés del valor de cambio.

Hoy, sin embargo, el momento histórico es diferente. Cuando se redactó el Manifiesto, la sociedad moderna era «una revolución continua de la producción»⁵⁷. Otra es la realidad que se percibe desde Potosí. La modernidad es cada vez más restringida, pero a la vez más violenta, más agresiva. La destrucción de fuerzas productivas es acompañada con la aniquilación de las pervivencias culturales andinas. En ambos procesos, la muerte es inversamente proporcional al disminuido desarrollo, de ahí el imperativo por minimizar costos, aun a pesar de la contaminación ambiental y las formas nativas de producción. El capital impone su modernidad a través de la barbarie. ¿Qué sentido tiene hablarle de progreso a un mundo que se sume en la rigidez de la muerte? (Benjamin).

El totalitarismo se halla a flor de piel en este desplazamiento regresivo. Ser «modernos» en el período actual, tiene necesariamente un sentido «tanático», destructivo. Desde sus antecedentes y premisas hasta el desenlace. diciembre de 1996 es expresión de ello. Una cultura dominante trata de imponer su decadencia a formas pretéritas de relacionamiento comunitario: contamina el agua y la tierra, destruye pactos simbólicos y ultima a quienes resisten su intromisión. Es en la reproducción de este acto, desplegado por los aparatos represivos del Estado en Amayapampa y Capasirca, que puede vislumbrarse la incompatibilidad y hasta el antagonismo entre economía de mercado, democracia y multiculturalismo. A través de esa sobredeterminación, el poder no articula, sino que subsume lo diverso a las relaciones burguesas de

⁵⁴ *Presencia*, 21/12/96.

⁵⁵ *Presencia*, 19/11/96.

⁵⁶ C. Marx y F. Engels: «Manifiesto del Partido Comunista» en *Obras escogidas II*, Editorial Progreso, Moscú, 1974 p. 115 (énfasis nuestro).

⁵⁷ *Ibíd.*, p. 114.

producción, impone su criterio; no es democrático y no podría serlo. La cultura andina por el contrario, pese al centenario avasallamiento del capital, no es una cultura muerta, es un mundo vivo, siempre renovado y recreado, basado en una conversación amigable y en la reciprocidad fraterna, como la cultura de la crianza en la que saber criar es indesligable de saber dejarse criar:

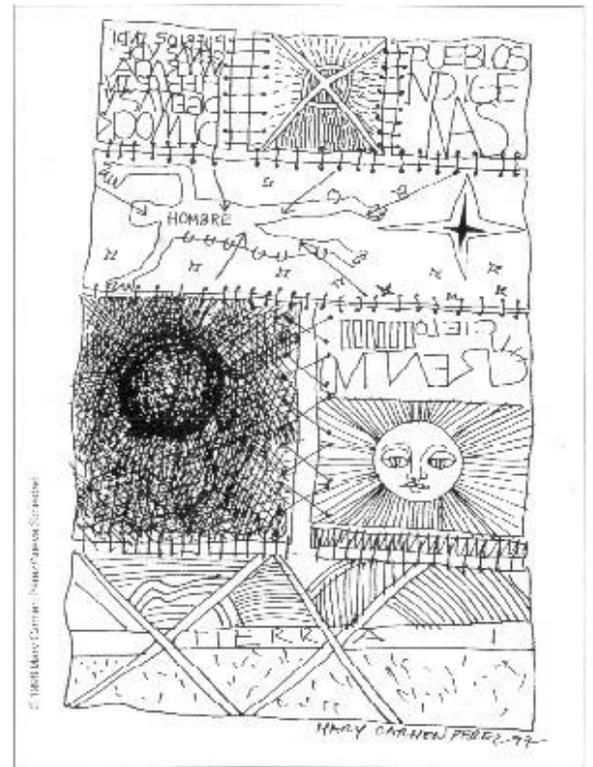
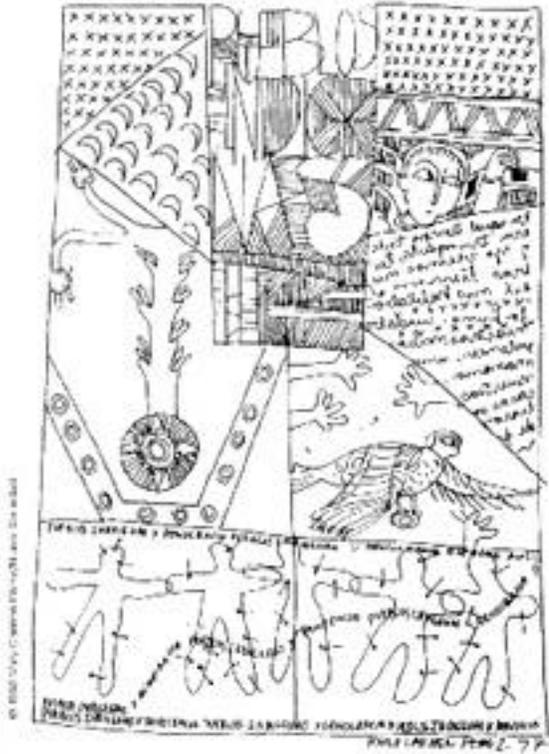
la concepción andina es holista por que en el mundo-animal lo que incide en uno cualquiera de sus órganos, afecta necesariamente al organismo al ser vivo... Se trata de un mundo comunitario de un mundo de amparo en el que no cabe exclusión alguna. Cada quien (ya sea un hombre, un árbol, una piedra) es tan importante como cualquier otro.⁵⁸

La modernidad capitalista ha sido hecha al revés, es unilateral, parcializada, atomizadora. En este sentido, el problema de la convivencia democrática de los pueblos indígenas no puede plantearse a partir del régimen político, sino desde la anatomía de la actual sociedad moderna, En el preciso momento que se ha identificado el «esqueleto» de la estructura social, es posible «olfatear» el totalitarismo, que escapa a las posibilidades del actual régimen democrático. La represión mana de las mismas necesidades de reproducir el sistema. Y, como la sociedad es mucho más amplia, más vasta que el modo de producción, el poder tiende a excederse. El 21 de diciembre, durante su paso por la región de Lagunillas, camino a Capasirca, la Comisión de Derechos Humanos se detuvo en un cacerío llamado Antara:

en una choza, yacía en un camastro improvisado, un campesino de no más de 25 años. Había sido víctima de con un proyectil de grueso calibre que le ingresó por el omoplato y le salió por el pecho, junto al corazón. La esposa cargada de su hijo de meses lloraba, y en quechua explicó que el jueves por la tarde cuando estaban en su parcela cerca de las cerranías de Amayapampa, una patrulla disparó a su compañero por la espalda cuando éste asustado se retiraba apresuradamente del lugar. Se trataba de Marcial Calla Fiesta, del ayllu Laime, al parecer, ajeno a los enfrentamientos.⁵⁹

⁵⁸ Eduardo Grillo Fernández: La Cosmovisión Andina de Siempre y la Cosmología Occidental Moderna, Pratec, Lima, 1993, p. 24.

⁵⁹ Comisión de Derechos Humanos: ob. cit. p. 7.



Las ilustraciones acompañaron al presente artículo en la edición impresa de la revista